



REPÚBLICA DE COLOMBIA



CNSC

COMISIÓN NACIONAL
DEL SERVICIO CIVIL

Igualdad, Mérito y Oportunidad

RESOLUCIÓN No 6357 DE 2020
26-05-2020



20202230063575

“Por la cual se concluye la actuación administrativa tendiente a decidir la procedencia de excluir de la Lista de Elegibles al aspirante SERGIO ANDRÉS GRAJALES ESCOBAR, Proceso de Selección No. 652 de 2018 – Convocatoria Territorial Centro Oriente”

EL DESPACHO DE CONOCIMIENTO

En ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 130 de la Constitución Política y, en especial, las consagradas en la Ley 909 de 2004, el Decreto Ley 760 de 2005, la Ley 1437 de 2011, el Acuerdo No. CNSC 555 de 2015 y el Acuerdo No. CNSC 20181000004656 de 2018, y

CONSIDERANDO:

1. Antecedentes

De conformidad con el artículo 11, literales c) e i), de la Ley 909 de 2004, le corresponde a la Comisión Nacional del Servicio Civil, en adelante CNSC, entre otras funciones, *“Elaborar las convocatorias a concurso para el desempeño de empleos públicos de carrera, de acuerdo con los términos y condiciones que establezcan la presente ley y el reglamento” (...)* y *“Realizar los procesos de selección para el ingreso al empleo público a través de las universidades públicas o privadas o instituciones de educación superior, que contrate para tal fin”*.

En observancia de la citada norma, la CNSC expidió el Acuerdo No. 20181000004656 del 14 de septiembre de 2018, *“Por el cual se establecen las reglas del Concurso abierto de méritos para proveer definitivamente los empleos vacantes pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal de la GOBERNACIÓN DE RISARALDA “Proceso de Selección No. 652 de 2018 – Convocatoria Territorial Centro Oriente”*.

En aplicación del artículo 30 de la Ley 909 de 2004, la CNSC suscribió con la Universidad Libre, el Contrato No. 575 de 2018, con el objeto de *“Desarrollar el proceso de selección para la provisión de empleos vacantes del Sistema General de Carrera Administrativa de algunas entidades de los departamentos de Risaralda, Caldas, Meta, Huila y Vichada, desde la etapa de verificación de requisitos mínimos hasta la consolidación de la información para la conformación de lista de elegibles”*.

Concluidas las Etapas de Inscripciones, de Verificación de Requisitos Mínimos y de aplicación de Pruebas, con sus respectivas reclamaciones, de este proceso de selección, se publicaron los resultados definitivos de cada una de las pruebas aplicadas a quienes concursaron por el empleo al cual el aspirante SERGIO ANDRÉS GRAJALES ESCOBAR, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.773.735, fue admitido, procediendo la CNSC a conformar y adoptar, en cumplimiento del artículo 49 del precitado Acuerdo de la Convocatoria, en concordancia con lo previsto en el numeral 4º del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, la correspondiente Lista de Elegibles mediante la Resolución No. 20202230033015 del 14 de febrero de 2020, en los siguientes términos:

ARTÍCULO PRIMERO. Conformar y adoptar la Lista de Elegibles para proveer UN (1) vacante del empleo denominado Técnico Administrativo, Código 367, Grado 2, identificado con el Código OPEC No. 22907, del Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal de la Gobernación de Risaralda, ofertado con el Proceso de Selección No. 652 de 2018 – Convocatoria Territorial Centro Oriente, así:

Posición	Tipo Documento	No. Documento	Nombre	Puntaje
1	CC	10009438	MANUEL HUMBERTO VILLAMIL GONZALEZ	88.55
2	CC	9773735	SERGIO ANDRES GRAJALES ESCOBAR	70.67

“Por la cual se concluye la actuación administrativa tendiente a decidir la procedencia de excluir de la Lista de Elegibles al aspirante SERGIO ANDRÉS GRAJALES ESCOBAR, Proceso de Selección No. 652 de 2018 – Convocatoria Territorial Centro Oriente”

Posición	Tipo Documento	No. Documento	Nombre	Puntaje
3	CC	42125203	CLAUDIA PATRICIA CARVAJAL RAMÍREZ	67.71
4	CC	42155752	ELSA VICTORIA HENAO OSPINA	66.05
5	CC	4453103	JORGE DIEGO HERNÁNDEZ VALENCIA	63.67
6	CC	1109068596	VIVIANA ANDREA GARCÍA ROA	56.48

2. Competencia y oportunidad para solicitar la exclusión de la Lista de Elegibles

Publicada la referida Lista de Elegibles el 19 de febrero de 2020, la Comisión de Personal de la Gobernación de Risaralda, mediante radicado interno No. 296685971 del 26 de febrero de 2020, presentó solicitud de exclusión de dicha lista del aspirante SERGIO ANDRÉS GRAJALES ESCOBAR, cumpliéndose los requisitos de competencia y oportunidad establecidos en el artículo 14 del Decreto Ley 760 de 2005, por el que se reglamentan los procedimientos a surtir ante y por la CNSC, para realizar esta solicitud:

ARTÍCULO 14. Dentro de los cinco (5) días siguientes a la publicación de la lista de elegibles, la Comisión de Personal de la entidad u organismo interesado en el proceso de selección o concurso podrá solicitar a la Comisión Nacional del Servicio Civil la exclusión de la lista de elegibles de la persona o personas que figuren en ella, cuando haya comprobado cualquiera de los siguientes hechos:

- 14.1. Fue admitida al concurso sin reunir los requisitos exigidos en la convocatoria.
- 14.2. Aportó documentos falsos o adulterados para su inscripción.
- 14.3. No superó las pruebas del concurso.
- 14.4. Fue suplantada por otra persona para la presentación de las pruebas previstas en el concurso.
- 14.5. Conoció con anticipación las pruebas aplicadas.
- 14.6. Realizó acciones para cometer fraude en el concurso.

Los argumentos expuestos por la Comisión de Personal de la Gobernación de Risaralda en su solicitud de exclusión, son los siguientes:

No cuenta con la experiencia relacionada del cargo a proveer exigida en los manuales de funciones de la entidad.

3. Competencia de la CNSC para resolver la solicitud de exclusión de la Lista de Elegibles

El artículo 130 de la Constitución Política establece que la CNSC es la “(...) responsable de la administración y vigilancia de las carreras de los servidores públicos, excepción hecha de las que tengan carácter especial”, norma que desarrolla el artículo 7 de la Ley 909 de 2004.

Con este fin, el artículo 12, literales a) y h), de la Ley 909 de 2004, le asigna a la CNSC las siguientes funciones de vigilancia de la correcta aplicación de las normas de Carrera Administrativa:

- a) Una vez publicadas las convocatorias a concursos, la Comisión podrá en cualquier momento, de oficio o a petición de parte, adelantar acciones de verificación y control de la gestión de los procesos con el fin de observar su adecuación o no al principio de mérito; y, dado el caso, suspender cautelarmente el respectivo proceso, mediante resolución motivada;

(...)

- h) Tomar las medidas y acciones necesarias para garantizar la correcta aplicación de los principios de mérito e igualdad en el ingreso y en el desarrollo de la carrera de los empleados públicos, de acuerdo a lo previsto en la presente ley (Subrayado fuera de texto).

Por su parte, el artículo 16 del Decreto Ley 760 de 2005, en relación con la exclusión de aspirantes de las Listas de Elegibles conformadas en los procesos de selección, dispone lo siguiente:

ARTÍCULO 16. La Comisión Nacional del Servicio Civil una vez recibida la solicitud de que trata los artículos anteriores y de encontrarla ajustada a los requisitos señalados en este decreto, iniciará la actuación administrativa correspondiente y comunicará por escrito al interesado para que intervenga en la misma.

Analizadas las pruebas que deben ser aportadas por la Comisión de Personal y el interesado, la Comisión Nacional del Servicio Civil adoptará la decisión de excluir o no de la lista de elegibles al participante. Esta decisión se comunicará por escrito a la Comisión de Personal y se notificará al participante y contra ella procede el recurso de reposición, el cual se interpondrá, tramitará y decidirá en los términos del Código Contencioso Administrativo.

“Por la cual se concluye la actuación administrativa tendiente a decidir la procedencia de excluir de la Lista de Elegibles al aspirante SERGIO ANDRÉS GRAJALES ESCOBAR, Proceso de Selección No. 652 de 2018 – Convocatoria Territorial Centro Oriente”

De las anteriores normas, se deduce la facultad legal de la CNSC para adelantar la presente actuación administrativa.

En consecuencia, en cumplimiento del precitado artículo 16 del Decreto Ley 760 de 2005, la CNSC profirió el Auto No. 20202230002404 del 12 de marzo de 2020, “*Por el cual se inicia una actuación administrativa tendiente a decidir la solicitud de exclusión de la Lista de Elegibles del aspirante SERGIO ANDRES GRAJALES ESCOBAR, OPEC 22907, del Proceso de Selección No. 652 de 2018 – Convocatoria Territorial Centro Oriente*”.

4. Comunicación del Auto de inicio de la actuación administrativa de exclusión de la Lista de Elegibles

Conforme al artículo 2 del referido Auto, el mismo fue comunicado el 19 de marzo de 2020 por la Secretaría General de la CNSC, en los términos del artículo 33 de la Ley 909 de 2004, al correo electrónico del señor SERGIO ANDRÉS GRAJALES ESCOBAR, concediéndole el término de diez (10) días hábiles para que, en ejercicio de su derecho de contradicción, interviniera en la presente actuación administrativa, los cuales transcurrieron el 20 de marzo y entre el 11 y 21 de mayo de 2020, teniendo en cuenta la suspensión de términos en los procesos de selección que adelanta la CNSC, ordenada en el artículo 1 de la Resolución 4970 de 2020, prorrogada por las Resoluciones 5265 y 5804 de 2020, expedidas por esta Comisión Nacional con ocasión de la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional por causa de la pandemia generada por el coronavirus COVID-19.

5. Intervención del aspirante en la actuación administrativa de exclusión de la Lista de Elegibles

Mediante radicados de entrada No. 20206000444502 y 20206000444522 del 27 de marzo del 2020, el aspirante intervino en la presente actuación administrativa, es decir, en fecha en la cual se encontraba vigente la precitada suspensión de términos en los procesos de selección que adelanta la CNSC. Sin embargo, en aplicación de los Principios de Eficacia y Debido Proceso, previstos en el artículo 3, numerales 1 y 11, de la Ley 1437 de 2011 y en consideración, además, que la finalidad de la referida suspensión de términos es de carácter garantista y no restrictivo, tales intervenciones se incorporaron al expediente el 11 de mayo de 2020, fecha en la que se reanudaron los términos suspendidos, en virtud de la Resolución CNSC 5936 del 8 de mayo de 2020.

En sus intervenciones el aspirante argumenta principalmente lo siguiente:

(...) Yo Sergio Andrés Grajales Escobar identificado con cedula de ciudadanía N° 9.773.735 de Armenia Quindío como directo implicado en el Acto Administrativo mencionado anteriormente hago uso de mi derecho a la legítima defensa ciñéndome a la ley bajo el principio de la buena fe y el principio de la sana competencia y evitando un proceso de competencia desleal, aporté en su momento los documentos exigidos por la CNSC cumpliendo con los términos establecidos (ser técnico profesional y contar con 15 meses de EXPERIENCIA RELACIONADA y como Alternativa de experiencia se dio la Equivalencia de estudio: Aplicar las equivalencias entre estudios y experiencia, establecidas en el Decreto 785 de 2005 ARTICULO 25 # 25.2 y las normas que lo modifiquen o adicione. Donde yo aporté en su momento los soportes en formación de: Técnico en gestión contable y financiera titulado por SENA, Técnico Profesional en Gestión Empresarial, Tecnología en Gestión Empresarial y Administración de Empresas los 3 últimos fui titulado por la Fundación Escuela De Administración y Mercadotecnia del Quindío EAM.

Además de lo mencionado anteriormente cuento también con la experiencia laboral requerida ya que he laborado en la Alcaldía de la Virginia como contratista en la secretaria de planeación en el área de sisben III y en la Secretaria de Gestión Administrativa en el área de Contratación manejando las plataformas SIA OBSERVA Y SIGEP y demás funciones que me asignen, labore en corporación IPS eje cafetero como auxiliar administrativo y de calidad y en finca hotel azulinas como administrador

Adicional a esto anexo como pruebas las actas de grado, los diplomas de mis títulos y las certificaciones laborales. Solicito me sea notificado el seguimiento que se está realizando al proceso con sus respectivas respuestas a mi correo electrónico (...) (Sic).

6. Fundamentos jurídicos para la decisión

En primer lugar, se debe resaltar que el numeral 1 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, establece que la convocatoria, como una etapa del proceso de selección para proveer vacantes definitivas de cargos de carrera administrativa, “(...) es norma reguladora de todo concurso y obliga tanto a la administración, como a las entidades contratadas para la realización del concurso y a los participantes” (subrayado fuera

“Por la cual se concluye la actuación administrativa tendiente a decidir la procedencia de excluir de la Lista de Elegibles al aspirante SERGIO ANDRÉS GRAJALES ESCOBAR, Proceso de Selección No. 652 de 2018 – Convocatoria Territorial Centro Oriente”

de texto), precepto sobre el que se ha pronunciado favorablemente la Corte Constitucional en diferentes sentencias, entre las cuales se pueden destacar las Sentencias SU-913 de 2009, SU-446 de 2011, T-829 de 2012 y T-180 de 2015. Específicamente, en la Sentencia SU-913 de 2009, M.P. Juan Carlos Henao Pérez, dicha corporación manifestó:

(...) En relación con la etapa de convocatoria, la sentencia T-256 de 1995 concluyó que “Al señalarse por la administración las bases del concurso, estas se convierten en reglas particulares obligatorias tanto para los participantes como para aquélla; es decir, que a través de dichas reglas la administración se autovincula y autocontrola, en el sentido de que debe respetarlas y que su actividad, en cuanto a la selección de los aspirantes que califiquen para acceder al empleo o empleos correspondientes, se encuentra previamente regulada, de modo que no puede actuar en forma discrecional al realizar dicha selección. Por consiguiente, cuando la administración se aparta o desconoce las reglas del concurso (...) incurre en violación de los principios que rigen la actividad administrativa (igualdad, moralidad, eficacia e imparcialidad), y por contera, puede violar los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al trabajo de quienes participaron en el concurso y resultan lesionados en sus intereses por el proceder irregular de aquélla” (Subrayado fuera de texto).

En la misma línea jurisprudencial, en la Sentencia SU-446 de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, expresó:

Por tanto, si lo que inspira el sistema de carrera es el mérito y la calidad, son de suma importancia las diversas etapas que debe agotar el concurso público. En las diversas fases de éste, se busca observar y garantizar los derechos y los principios fundamentales que lo inspiran, entre otros, los generales del artículo 209 de la Constitución Política y los específicos del artículo 2 de la Ley 909 de 2004 (...). La sentencia C-040 de 1995 (...) reiterada en la SU-913 de 2009 (...), explicó cada una de esas fases, las que por demás fueron recogidas por el legislador en el artículo 31 de la Ley 909 de 2004 (...).

(...)

Dentro de este contexto, la convocatoria es, entonces, “la norma reguladora de todo concurso y obliga tanto a la administración, como a las entidades contratadas para la realización del concurso y a los participantes”, y como tal impone las reglas de obligatoria observancia para todos, entiéndase administración y administrados-concursantes. Por tanto, como en ella se delinear los parámetros que guiarán el proceso, los participantes, en ejercicio de los principios de buena fe y confianza legítima, esperan su estricto cumplimiento. La Corte Constitucional ha considerado, entonces, que el Estado debe respetar y observar todas y cada una de las reglas y condiciones que se imponen en las convocatorias, porque su desconocimiento se convertiría en una trasgresión de principios axiales de nuestro ordenamiento constitucional, entre otros, la transparencia, la publicidad, la imparcialidad, así como el respeto por las legítimas expectativas de los concursantes (...).

(...)

Es indiscutible, entonces, que las pautas del concurso son inmodificables y, en consecuencia, a las entidades no le es dado variarlas en ninguna fase del proceso, por cuanto se afectarían principios básicos de nuestra organización, como derechos fundamentales de los asociados en general y de los participantes en particular (Subrayados fuera de texto).

En los mismos términos se pronunció en la Sentencia T-829 de 2012, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub:

Es preciso tener en cuenta que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 909 de 2004 (...), la convocatoria es norma reguladora de todo concurso y a ella quedan obligados tanto la Comisión Nacional del Servicio Civil como la entidad que convoca el concurso y todos los participantes (Subrayado fuera de texto).

Y más recientemente en la Sentencia T-180 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio:

La convocatoria se convierte en una expresión del principio de legalidad tanto para oferentes como para inscritos, de tal forma que incumplir las directrices allí estipuladas contraviene no solo los derechos de los aspirantes, sino aquel valor superior al cual está sujeto toda actuación pública. Dicho, en otros términos, el acto administrativo que la contenga funge como norma del concurso de méritos, por lo cual todos los intervinientes en el proceso deben someterse aquel so pena de trasgredir el orden jurídico imperante.

(...)

El concurso público ha sido el mecanismo establecido por la Carta Política para que en el marco de una actuación imparcial y objetiva (...), haga prevalecer al mérito como el criterio determinante para proveer los distintos cargos en el sector público. Su finalidad es que se evalúen las capacidades, la preparación y las aptitudes generales y específicas de los distintos aspirantes a un cargo, para de esta manera escoger entre ellos al que mejor pueda desempeñarlo, dejando de lado cualquier aspecto de orden subjetivo (...).

Dicha actuación debe estar investida con todas las ritualidades propias del debido proceso (...), lo que implica que se convoque formalmente mediante acto que contenga tanto de (sic) los requisitos exigidos para todos los cargos ofertados,

“Por la cual se concluye la actuación administrativa tendiente a decidir la procedencia de excluir de la Lista de Elegibles al aspirante SERGIO ANDRÉS GRAJALES ESCOBAR, Proceso de Selección No. 652 de 2018 – Convocatoria Territorial Centro Oriente”

como de (sic) las reglas específicas de las diversas etapas del concurso (...) a las que se verán sometidos los aspirantes y la propia entidad estatal (...). Sobre el particular, este Tribunal señaló en la Sentencia SU-913 de 2009 que:

- (i) Las reglas señaladas para las convocatorias son las leyes del concurso y son inmodificables (...).
- (ii) A través de las normas obligatorias del concurso, la administración se autovincula y autocontrola, en el sentido de que debe respetarlas y que su actividad en cada etapa se encuentra previamente regulada.
- (iii) Se quebranta el derecho al debido proceso y se infringe un perjuicio cuando la entidad organizadora del concurso cambia las reglas de juego aplicables y sorprende al concursante que se sujetó a ellas de buena fe (...).

(...)

En síntesis, la jurisprudencia constitucional ha expresado de manera uniforme y reiterada que los concursos – en tanto constituyen actuaciones adelantadas por las autoridades públicas – deberán realizarse con estricta sujeción (i) al derecho al debido proceso; (ii) al derecho a la igualdad y (iii) al principio de la buena fe (...). Dicha obligación se traduce, en términos generales, en el imperativo que tiene la administración de ceñirse de manera precisa a las reglas del concurso ya que aquellas, como bien lo ha sostenido esta Corporación, constituyen “ley para las partes” que intervienen en él (...) (Subrayados fuera de texto).

A su vez, el Consejo de Estado, Sección Primera, en Sentencia del 17 de febrero de 2011, M.P. María Elizabeth García González. Ref. 2010-03113-01, se pronunció así:

El concurso de méritos ha sido considerado el instrumento más idóneo y eficaz, para determinar las aptitudes de los aspirantes a un cargo. Además de los principios que lo inspiran, entre ellos, el mérito, la igualdad en el ingreso, la publicidad y la transparencia, la ejecución de sus reglas debe someterse al estricto cumplimiento del debido proceso y respetar todas y cada una de las garantías que rodean el proceso de selección (Subrayado intencional).

(...) De este modo, frente a la vulneración del debido proceso administrativo, entendido como *“la regulación jurídica que de manera previa limita los poderes del Estado y establece las garantías de protección a los derechos de los administrados, de modo que ninguna de las actuaciones de las autoridades públicas dependa de su propio arbitrio, sino que se encuentren sujetas siempre a los procedimientos señalados en la ley”*.

Sobre la finalidad de los concursos de méritos para proveer cargos de carrera administrativa, la Corte Constitucional en Sentencia C-533 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, señaló:

Como lo ha expresado la jurisprudencia, [s]e debe recordar que la finalidad misma de la carrera administrativa es reclutar un personal óptimo y capacitado para desarrollar la función pública. Con el propósito de garantizar el cumplimiento de los fines estatales, la carrera permite que quienes sean vinculados a la administración bajo esta modalidad, ejerzan de manera calificada la función pública que se les asigna, ya que dicho sistema está diseñado para que ingresen y permanezcan en él aquellas personas que tengan suficientes calidades morales, académicas, intelectuales y laborales para asumir con eficiencia y honestidad dicho servicio. Existe entonces una estrecha relación entre el cumplimiento de los fines del Estado y la prioridad que el constituyente otorga a la carrera administrativa, que se explica en la naturaleza del sistema y en los principios que lo fundan (Subrayado fuera de texto).

Por otra parte, el artículo 17 del referido Acuerdo de Convocatoria, define los siguientes términos:

ARTICULO 17°. DEFINICIONES. Los factores que se tendrán en cuenta para determinar los requisitos de los empleos de las entidades territoriales conforme a lo previsto en el Decreto Ley 785 de 2005 y la Ley 1064 de 2006, serán la educación formal, la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, y la experiencia.

Para todos los efectos del presente Acuerdo, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:

(...)

Experiencia: Se entiende como los conocimientos, las habilidades y destrezas adquiridas o desarrolladas durante el ejercicio de un empleo, profesión, arte u oficio.

Para efectos del presente Acuerdo, la experiencia se clasifica en profesional, relacionada, profesional relacionada y laboral, y se tendrá en cuenta de acuerdo con lo establecido en la OPEC que corresponde al Manual de Funciones y Competencias Laborales de la entidad objeto del Proceso de Selección.

(...)

Experiencia relacionada: Es la adquirida en el ejercicio de empleos o actividades que tengan funciones similares a las del cargo a proveer.

Ahora bien, en el artículo 19 ibídem indicó que la Experiencia se debía certificar así:

“Por la cual se concluye la actuación administrativa tendiente a decidir la procedencia de excluir de la Lista de Elegibles al aspirante SERGIO ANDRÉS GRAJALES ESCOBAR, Proceso de Selección No. 652 de 2018 – Convocatoria Territorial Centro Oriente”

ARTÍCULO 19°. CERTIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA. La experiencia se acreditará mediante la presentación de certificados escritos, expedidos por la autoridad competente de las respectivas instituciones oficiales o privadas.

Para validar la experiencia profesional a partir de la fecha de terminación de materias deberá adjuntarse la certificación expedida por la institución educativa, en que conste la fecha de terminación y la aprobación de la totalidad del pensum académico. En caso de no aportarse, la misma se contará a partir de la obtención del título profesional. Para el caso de los profesionales de la salud e ingenieros se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 17 del presente Acuerdo.

Los certificados de experiencia en entidades públicas o privadas, deben indicar de manera expresa y exacta:

- a) Nombre o razón social de la empresa que la expide.
- b) Empleo o empleos desempeñados con fecha de inicio y terminación para cada uno de ellos (día, mes y año), evitando el uso de la expresión actualmente.
- c) Tiempo de servicio como se indica en el numeral anterior
- d) Funciones correspondientes al empleo o empleos desempeñados, salvo que la ley las establezca

En los casos en que la ley establezca las funciones del cargo o se exija solamente experiencia laboral, no es necesario que las certificaciones las especifiquen.

Las certificaciones deberán ser expedidas por el jefe de personal o el representante legal de la entidad o empresa, o quien haga sus veces.

Para el caso de certificaciones expedidas por personas naturales, las mismas deberán llevar la firma, antefirma legible (Nombre completo) y número de cédula del empleador contratante, así como su dirección y teléfono.

Cuando las certificaciones indiquen una jornada laboral inferior a ocho (8) horas diarias, el tiempo de experiencia se establecerá sumando las horas trabajadas y dividiendo el resultado por ocho (8).

La experiencia acreditada mediante contratos de prestación de servicios, deberá ser soportada con la respectiva certificación de la ejecución del contrato o mediante el acta de liquidación o terminación, precisando las actividades desarrolladas y las fechas de inicio (día, mes y año) y terminación de ejecución del contrato (día, mes y año). No se aceptará la experiencia acreditada cuando sólo se presente la copia del contrato, sin que la misma esté acompañada de los documentos antes mencionados.

Cuando se presente experiencia adquirida de manera simultánea en una o varias instituciones (Tiempos traslapados), el tiempo de experiencia se contabilizará por una sola vez.

En los casos en que el aspirante haya ejercido su profesión o actividad en forma independiente o en una empresa o entidad actualmente liquidada, la experiencia se acreditará mediante declaración del mismo, siempre y cuando se especifiquen las fechas de inicio y de terminación (día, mes y año), el tiempo de dedicación y las funciones o actividades desarrolladas, la cual se entenderá rendida bajo la gravedad del juramento.

PARÁGRAFO 1º. Las certificaciones que no reúnan las condiciones anteriormente señaladas no serán tenidas como válidas y, en consecuencia, no serán objeto de evaluación dentro del proceso de selección ni podrán corregirse o complementarse posteriormente. No se deben adjuntar actas de posesión ni documentos diferentes para demostrar la experiencia.

PARÁGRAFO 2º. Los certificados de experiencia expedidos en el exterior deberán presentarse debidamente traducidos y apostillados o legalizados, según sea el caso. La traducción debe ser realizada por un traductor certificado, en los términos previstos en la Resolución No. 3269 de 14 de junio de 2016 expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

7. Análisis probatorio

Se procede, entonces, a realizar un estudio de los documentos aportados por el aspirante en el Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad, en adelante SIMO, dentro del plazo señalado para cumplir con esta labor en la convocatoria que nos ocupa, lo cual permitirá establecer si procede o no la causal alegada por la Comisión de Personal para excluir al elegible.

Para tal fin, se tendrán en cuenta los requisitos exigidos para el empleo identificado con el código OPEC No. 22907 al cual se inscribió el aspirante, conforme lo prevé el artículo 11 del Acuerdo de la Convocatoria. Al verificar en el SIMO esta información, se encuentra lo siguiente:

Estudio: Título de formación técnica profesional o tecnológica en las disciplinas académicas de los núcleos básicos del conocimiento (NBC) en: NBC- Administración; NBC- Economía; NBC Contaduría Pública; NBC Ingeniería Administrativa y Afines; Ingeniería Industrial y Afines; Otras Ingenierías; tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por la ley.

Experiencia: Quince (15) meses de experiencia relacionada.

“Por la cual se concluye la actuación administrativa tendiente a decidir la procedencia de excluir de la Lista de Elegibles al aspirante SERGIO ANDRÉS GRAJALES ESCOBAR, Proceso de Selección No. 652 de 2018 – Convocatoria Territorial Centro Oriente”

Alternativa de estudio: Para la homologación de equivalencias entre estudios y experiencia, la administración departamental de Risaralda dará cumplimiento a lo establecido en los artículos 25 y 26 del capítulo quinto (V), del Decreto 785 del 17 de marzo de 2005.

Alternativa de experiencia:

Equivalencia de estudio: Aplicar las equivalencias entre estudios y experiencia, establecidas en el Decreto 785 de 2005 y las normas que lo modifiquen o adicionen. Por **Equivalencia de experiencia:** Aplicar las equivalencias entre estudios y experiencia, establecidas en el Decreto 785 de 2005 y las normas que lo modifiquen o adicionen (Sic).

En atención al argumento de exclusión expuesto por la Comisión de Personal y a lo planteado por el aspirante en sus intervenciones, se procede a verificar en el SIMO el documento con el cual la Universidad Libre, como operador del concurso para la Etapa de Verificación de Requisitos Mínimos, consideró que el aspirante acreditaba el requisito mínimo de Experiencia para acceder al empleo al cual se inscribió, así:

- Acta de Grado del 3 de mayo del 2013, expedida por la Escuela de Administración y Mercadotecnia del Quindío, mediante la cual se otorga el título de Administrador de Empresas al señor SERGIO ANDRÉS GRAJALES ESCOBAR.

El anterior documento fue validado por el operador del concurso para el cumplimiento de los quince (15) meses de Experiencia Relacionada, aplicando la Equivalencia del artículo 25 del Decreto 785 de 2005, que a continuación se transcribe:

ARTÍCULO 25. Equivalencias entre estudios y experiencia. Las autoridades territoriales competentes, al establecer el manual específico de funciones y de requisitos, no podrán disminuir los requisitos mínimos de estudios y de experiencia, ni exceder los máximos señalados para cada nivel jerárquico. Sin embargo, de acuerdo con la jerarquía, las funciones, las competencias y las responsabilidades de cada empleo, podrán prever la aplicación de las siguientes equivalencias:

(...)

25.2. Para los empleos pertenecientes a los niveles técnico y asistencial:

(...)

25.2.3. Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis (6) meses de experiencia relacionada y curso específico de mínimo sesenta (60) horas de duración y viceversa, siempre y cuando se acredite diploma de bachiller para ambos casos.

No obstante lo expuesto, el Despacho consideró necesario ordenar de oficio la práctica de una prueba, tendiente a conocer si “el aspirante SERGIO ANDRES GRAJALES ESCOBAR, identificado con cédula de ciudadanía No. 9773735, cursó el Programa de Administración de Empresas en la Fundación Escuela de Administración y Mercadotecnia del Quindío - EAM, bajo la modalidad de ciclos propedéuticos y cuál es la duración de los programas de formación de Administración de Empresas, discriminado por niveles de formación, es decir, para el nivel Técnico, Tecnólogo y Profesional”, por lo cual se requirió a la Escuela de Administración y Mercadotecnia del Quindío – EAM, para que informara lo pertinente.

En respuesta a dicho requerimiento, el Vicerrector Académico de la Escuela de Administración y Mercadotecnia del Quindío – EAM, remitió el 21 de marzo de 2020, correo electrónico mediante el cual certificó que “Al revisar el estado académico del señor Sergio Andrés Grajales Escobar CC. 9.773.735 se obtiene la siguiente información:

Grado de nivel Técnico profesional
Fecha 5 de mayo de 2011, acta 299, folio 8
Programa: Técnica profesional en Gestión Empresarial
Duración: 4 semestres

Grado de nivel Tecnológico
Fecha 29 de junio de 2012, acta 351 folio 9
Programa: Tecnología en Gestión Empresarial
Duración: 6 semestres

Observación: Se especifica que dada la formación por ciclos propedéuticos en el programa tecnológico se reconocen los 4 semestres del programa técnico profesional. Es decir, cursa dos semestres adicionales a los cuatro cursados en el programa técnico.

Grado de nivel Universitario

“Por la cual se concluye la actuación administrativa tendiente a decidir la procedencia de excluir de la Lista de Elegibles al aspirante SERGIO ANDRÉS GRAJALES ESCOBAR, Proceso de Selección No. 652 de 2018 – Convocatoria Territorial Centro Oriente”

Fecha 03 de mayo de 2013, acta 271 folio 7

Programa: Administración de empresas

Duración: 9 semestres

Observación: Se especifica que dada la formación por ciclos propedéuticos en el programa universitario se reconocen los 4 semestres del programa técnico profesional, además de los 2 semestres del tecnológico. Es decir, cursa tres semestres adicionales a los seis cursados en los programas técnico y tecnológico.

Teniendo en cuenta la suspensión de términos en los procesos de selección que adelanta la CNSC, ordenada en el artículo 1 de la Resolución 4970 de 2020, prorrogada por las Resoluciones 5265 de 2020 y 5804 de 2020, expedidas por esta Comisión Nacional con ocasión de la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional por causa de la pandemia generada por el coronavirus COVID-19 y en aplicación de los Principios de Eficacia y Debido Proceso, previstos en el artículo 3, numerales 1 y 11, de la Ley 1437 de 2011 y en consideración, además, que la finalidad de la referida suspensión de términos es de carácter garantista y no restrictivo, dicha prueba se entendió incorporada el día 11 de mayo de 2020, en virtud de la Resolución CNSC No. 5936 del 8 de mayo de 2020.

Así mismo, se dio traslado de la referida prueba a la Comisión de Personal de la Gobernación de Risaralda mediante radicado No.20202020396051 del 12 de mayo de 2020 y al señor SERGIO ANDRÉS GRAJALES ESCOBAR mediante radicado No. 20202020396041 del 12 de mayo de 2020.

Ahora bien, frente al caso que nos ocupa, resulta necesario hacer las siguientes precisiones respecto a la formación Técnica, Tecnológica y Profesional y a los títulos que en cada uno de estos programas se otorga. Sobre el particular, la Ley 30 de 1992, establece en su artículo 25 lo siguiente:

Artículo 25. Los programas académicos de acuerdo a su campo de acción, cuando son ofrecidos por una institución técnica profesional, conducen a título en la ocupación o área correspondiente. Al **título deberá anteponerse la denominación de: "técnico profesional en..."**.

Los ofrecidos por las instituciones universitarias o **escuelas tecnológicas**, o por una universidad, **conducen al título en la respectiva ocupación, caso en el cual deberá anteponerse la denominación de: "técnico profesional en..."**. Si hacen relación a profesiones o disciplinas académicas, al título podrá anteponerse la denominación de: "profesional en..." o "tecnólogo en..."

Por su parte, la Ley 749 del 2002, “*Por la cual se organiza el servicio público de la educación superior en las modalidades de formación técnica profesional y tecnológica, y se dictan otras disposiciones*”, en su artículo 3° dispuso respecto de los ciclos de formación, lo siguiente:

Artículo 3. De los ciclos de formación. Las instituciones técnicas profesionales y tecnológicas de educación superior organizarán su actividad formativa de pregrado en ciclos propedéuticos de formación en las áreas de las ingenierías, la tecnología de la información y la administración, así:

a) **El primer ciclo**, estará orientado a generar competencias y desarrollo intelectual como el de aptitudes, habilidades y destrezas al impartir conocimientos técnicos necesarios para el desempeño laboral en una actividad, en áreas específicas de los sectores productivo y de servicios, que **conducirá al título de Técnico Profesional en...** La formación técnica profesional comprende tareas relacionadas con actividades técnicas que pueden realizarse autónomamente, habilitando para comportar responsabilidades de programación y coordinación;

b) **El segundo ciclo**, ofrecerá una formación básica común, que se fundamente y apropie de los conocimientos científicos y la comprensión teórica para la formación de un pensamiento innovador e inteligente, con capacidad de diseñar, construir, ejecutar, controlar, transformar y operar los medios y procesos que han de favorecer la acción del hombre en la solución de problemas que demandan los sectores productivos y de servicios del país. La formación tecnológica comprende el desarrollo de responsabilidades de concepción, dirección y gestión de conformidad con la especificidad del programa, **y conducirá al título de Tecnólogo en el área respectiva;**

c) **El tercer ciclo, complementará el segundo ciclo, en la respectiva área del conocimiento**, de forma coherente, con la fundamentación teórica y la propuesta metodológica de la profesión, y debe hacer explícitos los principios y propósitos que la orientan desde una perspectiva integral, considerando, entre otros aspectos, las características y competencias que se espera posea el futuro profesional. Este ciclo permite el ejercicio autónomo de actividades profesionales de alto nivel, e implica el dominio de conocimientos científicos y técnicos **y conducirá al título de profesional en...**

Teniendo en cuenta lo anterior, sólo se puede acreditar la formación Técnica Profesional o Tecnológica con el respectivo título, el cual debe responder a las denominaciones que establece el artículo 25 de la Ley 30 de 1992 y, en todo caso, si la pretensión es acreditar tanto el título de formación académica como el requisito de Experiencia Relacionada, es menester verificar si dicho Programa de Formación se impartió mediante la modalidad de Ciclos Propedéuticos y cuál fue la duración del mismo.

“Por la cual se concluye la actuación administrativa tendiente a decidir la procedencia de excluir de la Lista de Elegibles al aspirante SERGIO ANDRÉS GRAJALES ESCOBAR, Proceso de Selección No. 652 de 2018 – Convocatoria Territorial Centro Oriente”

En este orden de ideas, la prueba allegada por la Escuela de Administración y Mercadotecnia del Quindío – EAM, da cuenta de que el aspirante adquirió los siguientes títulos: Título de Técnico Profesional en Gestión Empresarial, título de Tecnólogo en Gestión Empresarial y título Profesional de Administrador de Empresas, bajo la modalidad de Ciclos Propedéuticos. El título de Técnico Profesional en Gestión Empresarial, que pertenece al NBC de Administración, le permitió al señor SERGIO ANDRÉS GRAJALES ESCOBAR acreditar el requisito mínimo de Formación requerido para el empleo a proveer.

Ahora bien, para obtener el título Profesional de Administrador de Empresas, el aspirante cursó y aprobó un total de 9 semestres, de los cuales 4 corresponden al Ciclo Propedéutico de Técnico Profesional, según consta en la prueba solicitada.

Así las cosas, aplicado la precitada Equivalencia del artículo 25 del Decreto 785 de 2005, se tiene que el aspirante SERGIO ANDRÉS GRAJALES ESCOBAR, al acreditar el título Profesional de Administrador de Empresas, cuenta con dos años de Educación Superior adicionales a los que aprobó para ser Técnico Profesional en Gestión Empresarial, los cuales se pueden homologar por doce (12) meses de Experiencia Relacionada. Sin embargo, dado que el empleo a proveer exige quince (15) meses de Experiencia Relacionada, en virtud de las facultades constitucionales y legales que posee esta CNSC, se procederá a verificar en el SIMO las demás certificaciones laborales aportadas por el aspirante en término al concurso, en aras de establecer si con las mismas cumple con la Experiencia requerida:

- Certificación expedida por la Secretaría de Gestión Administrativa de la Alcaldía de Virginia (Risaralda), el 16 de julio de 2018, donde consta que el aspirante ejecutó los siguientes contratos:
 - AM CPS – CP No. 006-2017, entre el 11 de mayo de 2017 y el 10 de junio de 2017, cuyo objeto correspondió a *“Personal de apoyo para la identificación y caracterización de las familias damnificadas en los diferentes sectores del centro urbano a raíz de la emergencia por inundación para la respuesta efectiva a la situación de calamidad pública declarada mediante Decreto No. 064 de 2017”*.
 - AM CPS – No. 147-217, entre el 22 de junio de 2017 y el 31 de diciembre de 2017, cuyo objeto correspondió a *“Prestar servicios de apoyo en los procesos y actividades de la secretaría de planeación y desarrollo económico para el fortalecimiento del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios para programas sociales en la actividad de digitación de datos del Sisbén II en el municipio de la Virginia”*.
 - AM CPS – No. 045 -2018, entre el 17 de enero de 2018 y el 17 de julio de 2018, cuyo objeto correspondió a *“Prestar servicios de apoyo en los procesos de los componentes de la gestión documental y actualización del sistema de formación y gestión del empleo público (SIGEP) en el municipio de la Virginia”*.

La anterior certificación cumple con los requisitos del artículo 19 del Acuerdo de Convocatoria, pues los objetos contractuales se encuentran tan específicamente detallados que dan cuenta de las actividades realizadas por el aspirante con su ejecución. Particularmente, con los Contratos AM CPS – No. 147-217 y el AM CPS – No. 045 -2018, el aspirante realizó actividades de “digitación de datos” y “apoyo en los procesos de la gestión documental y actualización del sistema de formación y gestión del empleo público (SIGEP)”, tareas que guardan relación con las funciones del empleo a proveer referidas a *“Apoyar las labores administrativas (...)”, “Administrar el archivo (...)” y “Organizar el 100% de la documentación puesta bajo su responsabilidad, de acuerdo con los procedimientos establecidos por el Sistema de Gestión Documental y transferirla oportunamente al archivo central del Departamento”, “Elaborar y actualizar la base de datos (...)”, “Emplear los diferentes instrumentos electrónicos implementados para la gestión de los archivos y comunicaciones oficiales” y “Aportar al fortalecimiento de las herramientas informáticas a través del registro y flujo de la información (...)”*. Con los citados contratos el aspirante acredita 13 meses y 11 días de Experiencia Relacionada.

Sobre este particular, es necesario poner de presente que el Consejo de Estado se ha pronunciado sobre la desproporción que significaría exigir a los aspirantes la acreditación de las mismas funciones establecidas para los empleos que se ofertan, así:

Consejo de Estado, Sentencia 00021 del 6 de mayo de 2010, C.P. Susana Buitrago Valencia:

“Por la cual se concluye la actuación administrativa tendiente a decidir la procedencia de excluir de la Lista de Elegibles al aspirante SERGIO ANDRÉS GRAJALES ESCOBAR, Proceso de Selección No. 652 de 2018 – Convocatoria Territorial Centro Oriente”

(...) La Sala, como en anteriores oportunidades, reitera que el hecho de que la Administración establezca como regla que para acceder a determinado cargo se deba acreditar experiencia profesional relacionada con las funciones de ese cargo, no es violatorio ni del derecho a la igualdad ni del derecho al trabajo, ni del derecho de acceso a los cargos y funciones públicas. Es válido que la administración establezca el perfil que se requiere cumplir para que se pueda acceder a determinado cargo o empleo público. Uno de esos requisitos puede ser el de acreditar que el aspirante ha tenido en el pasado otros empleos o cargos o actividades que guarden cierta similitud con las funciones que debería desempeñar en caso de que fuera nombrado en el cargo para el cual se ha presentado. Empero, no se trata de que deba demostrarse que ha cumplido exactamente las mismas funciones, pues ello implicaría que la única manera de acreditar experiencia relacionada, sería con el desempeño del mismo cargo al que se aspira, lo que resulta a todas luces ilógico y desproporcionado. Pero sí se debe probar que existe una experiencia en cargos o actividades en los que se desempeñaron funciones similares (Subrayado fuera del texto).

Consejo de Estado, Sentencia No. 63001-23-33-000-2013-00140-01, proferida dentro de la acción de tutela impetrada por el señor Hugo Alexander Puerta Jaramillo:

El análisis de las dos delimitaciones permite afirmar a la Sala que la experiencia relacionada, que dota de contenido a las competencias laborales requeridas para el ejercicio de un empleo, adquirió con el Decreto 4476 de 2007 mayor consistencia y coherencia en el marco de un sistema de ingreso a la carrera administrativa en el que el concurso abierto y público de méritos es predominante, con miras a la garantía del derecho a la igualdad.

Bajo este último supuesto, la acreditación de la experiencia cualificada a la que viene haciéndose referencia no exige demostrar tiempo de servicio en un cargo igual o equivalente al que se aspira, sino en uno en el que las funciones sean similares, permitiéndole al recién ingresado aprender los demás conocimientos específicos de la materia a ejecutar (Subrayado fuera de texto).

Es decir, no se trata que el aspirante tenga la carga de acreditar exactamente las mismas funciones del empleo para el cual concursa, pues bajo esa línea, los únicos que podrían acceder a dicho empleo serían quienes lo hayan ocupado con anterioridad, interpretación que, a todas luces, falta al derecho constitucional que le asiste a todos los ciudadanos de acceder a los cargos públicos¹, previo cumplimiento de los respectivos requisitos. Conforme se indicó en líneas precedentes, ciñéndonos al Acuerdo de Convocatoria, cuando se pretenda acreditar Experiencia Relacionada, es preciso que el aspirante haya adquirido la Experiencia en empleos que guarden similitud con las funciones del empleo para el cual decidió concursar, aspectos que se encuentran demostrados con las certificaciones laborales anteriormente analizadas.

Así las cosas, el aspirante acredita en total 25 meses y 11 días de Experiencia Relacionada, tiempo superior a los quince (15) meses de Experiencia Relacionada que exige la OPEC 22907.

Se concluye, entonces, que el señor **SERGIO ANDRES GRAJALES ESCOBAR, CUMPLE** con los requisitos mínimos para acceder al empleo identificado con el código OPEC No. 22907, denominado Técnico Administrativo, Código 367, Grado 2, ofertado en el Proceso de Selección No. 652 de 2018 – Convocatoria Territorial Centro Oriente, razón por la cual no se considera procedente la exclusión solicitada por la Comisión de Personal de la Gobernación de Risaralda.

En mérito de lo expuesto, y teniendo en cuenta que mediante el Acuerdo No. CNSC 555 de 2015, se dispuso que es función de los Despachos de los Comisionados, adelantar las actuaciones administrativas tendientes a decidir la exclusión de los elegibles, en desarrollo de los procesos de selección que tiene a su cargo, y proferir los correspondientes actos administrativos,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. No excluir a **SERGIO ANDRES GRAJALES ESCOBAR**, identificado con cédula de ciudadanía No. 9773735, de la Lista de Elegibles conformada y adoptada mediante Resolución No. 20202230033015 del 14 de febrero de 2020, para proveer una (1) vacante del empleo denominado Técnico Administrativo, Código 367, Grado 2, identificado con el Código OPEC No. 22907, ofertado en el Proceso de Selección No. 652 de 2018 – Convocatoria Territorial Centro Oriente, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO. Notificar el contenido de la presente Resolución a **SERGIO ANDRÉS GRAJALES ESCOBAR**, al correo electrónico sage554@hotmail.com, teniendo en cuenta que existe

¹ Artículo 40 de la Constitución Política de Colombia.

“Por la cual se concluye la actuación administrativa tendiente a decidir la procedencia de excluir de la Lista de Elegibles al aspirante SERGIO ANDRÉS GRAJALES ESCOBAR, Proceso de Selección No. 652 de 2018 – Convocatoria Territorial Centro Oriente”

autorización expresa para la utilización de este medio de notificación, en los términos de la Ley 1437 de 2011.

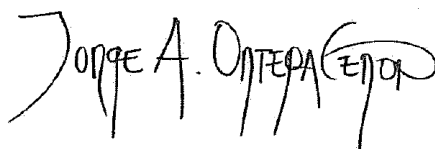
ARTÍCULO TERCERO. Contra la presente Resolución procede el Recurso de Reposición, el cual deberá ser interpuesto ante la CNSC dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de la misma, de conformidad con lo establecido en el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO CUARTO. Comunicar el contenido de la presente Resolución al Representante Legal y a la Comisión de Personal de la Gobernación de Risaralda, en la dirección Calle 19 No. 13 – 17, Pereira (Risaralda) y a los correos electrónicos gobernador@risaralda.gov.co, jhonmontoya@rsaralda.gov.co.


ARTÍCULO QUINTO. Publicar el presente acto administrativo en la página web de la Comisión Nacional del Servicio Civil, www.cnsc.gov.co.

Dada en Bogotá D.C.,

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE



JORGE A. ORTEGA CERÓN
Comisionado

Aprobó: Rafael Ricardo Acosta Rodríguez – Asesor del Despacho 

Revisó: Edwin A. Ruiz Moreno – Gerente Convocatoria Territorial Centro Oriente 

Proyectó: Amparo Cabral Valencia - Profesional Especializado del Despacho 